

Acabar con el Estado

Araceli Damián*

Mientras que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) promete alcanzar un crecimiento anual del Producto Interno Bruto de 5% al final del sexenio, las proyecciones para este año se reducen una vez más, como ha venido sucediendo en los últimos meses, al 3%, comparado con el 3.85% proyectado a finales del año pasado.

La reducción en las expectativas se explica por la dependencia comercial de México respecto de la economía de los Estados Unidos que está en franca desaceleración. A pesar de que esta dependencia se reconoce, en el PND se sostiene que el bajo nivel de crecimiento se debe a la “ausencia de cambios importantes”, sin los cuales “el crecimiento de la economía mexicana será, en promedio, de alrededor del 3.5%”.

Alcanzar una tasa de crecimiento del 5% en un solo año no requiere “cambios importantes”, ésta fue la tasa a la que casi se llegó en el último año de Fox (4.8% en 2006). Por tanto, una promesa de crecimiento del 5% en un solo año, de seis de gobierno, es francamente muy pobre. Los analistas económicos coinciden en que si se utilizara la capacidad productiva instalada México podría crecer entre 5 y 6% todos los años. Es decir, no se necesitan grandes cambios, sólo hacer uso extensivo de dicha capacidad.

Un vistazo de largo plazo permite observar que a pesar de las grandes reformas estructurales implementadas a raíz de la crisis de la deuda, fue precisamente durante la primera administración panista que la economía mexicana tuvo el más bajo nivel de crecimiento registrado durante la era tecnócrata neoliberal sin considerar el sexenio de Miguel de la Madrid.

Después del lamentable desempeño de la economía en el periodo 1982-1988 (que en términos per cápita significó una caída anual del PIB de 1.7%), la economía mexicana alcanzó un crecimiento promedio anual de casi 4% entre 1988 y 1994, bajando al 3.4% en el siguiente sexenio (1994-2000) y rematando en el foxista con un triste 2.3% anual (tasas que en términos per cápita representaron aumentos de sólo 2, 1.7 y 1.3 por ciento, respectivamente).

Pero ¿qué ha pasado en nuestro país?, ¿cómo es que a pesar de los radicales cambios estructurales que se llevaron a cabo en los ochenta y noventa, la economía mexicana del Siglo XXI tiene tasas de crecimiento cada vez más bajas? Las “grandes” reformas que, según los tecnócratas, todavía se necesitan para llegar al paraíso prometido por organismos internacionales y gobiernos son la fiscal, la laboral y la energética. Pero esas reformas ¿realmente producirán tal milagro?

En materia fiscal, el PND establece que el principal problema de recaudación es la complejidad derivada de las diferentes exenciones y tratamientos especiales a ciertos sectores, atribuyéndoles erróneamente la gran evasión fiscal que padecemos. Podemos esperar entonces que la reforma fiscal se encamine a la eliminación de la tasa cero en el IVA en alimentos y medicinas al tiempo que establezca una tasa única del impuesto sobre la renta. Así un obrero tendrá que pagar la misma tasa impositiva que su empleador, tanto por su ingreso como por su consumo, a pesar de que uno padece carencias en las necesidades básicas y el otro vive en la opulencia y el desperdicio. Difícilmente el IVA en alimentos y medicina proporcionaría los recursos que el gobierno necesita, pero seguramente elevaría la conflictividad social mucho más allá de los niveles actualmente.

Pero para qué quiere el gobierno más recursos si no tiene planteamiento de inversión alguno que vaya más allá de continuar con la privatización en infraestructura y servicios. Lo anterior se constata cuando el PND plantea que para alcanzar el objetivo de “fomentar una mayor inversión física” en infraestructura, “las políticas públicas serán conducentes a aumentar la rentabilidad de proyectos, reducir los costos ... y limitar el riesgo al que están sujetas las inversiones.”

No sorprende entonces que, a pesar del fracaso de la participación de la iniciativa privada en la construcción de carreteras, que originó que el gobierno instrumentara el rescate carretero (más bien rescate de las empresas) con un alto costo para quienes pagamos impuestos, el actual gobierno haya tenido como primera acción en la materia reprivatizar las carreteras rescatadas.

Desde el punto de vista laboral los tecnócratas proclaman que se debe aumentar la “flexibilidad” en el mercado de trabajo. Quienes abogan por esta modificación ignoran (o pretenden ignorar) que se ha mostrado en diversos estudios (sobre todo a cargo de Graciela Bensusán) que en comparación con otros países latinoamericanos, aunque desde el punto de vista legal el mercado de trabajo en México sea el de menor flexibilidad, en la práctica es el más flexible dado que no se respeta la ley. De esta forma, aun cuando las leyes cambiaran, el impacto en la productividad sería muy pequeño o nulo (suponiendo que esta es la vía para aumentarla, lo que está en duda), pero la afectación de derechos será mayúscula. De la reforma energética, ni hablar. Desde el sexenio pasado se han instrumentado mecanismos para subrepticamente privatizar el sector (a pesar de su prohibición en la Constitución). Pero la privatización de Pemex y CFE sería suicida, ya que las finanzas públicas dependen en más del 30% de los ingresos derivados del petróleo. Pero quizás con esta reforma se lograría lo que no han podido hacer los tecnócratas durante dos décadas de fallidas recetas: acabar con el Estado.

*El Colegio de México, adamian@colmex.mx